

La columna de...

JUAN MARCOS HENRÍQUEZ,
DR. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Entre el déficit fiscal y el espejismo de la libertad

Los socialistas chilenos del siglo 21 nos enfrentamos al desafío de demostrar a la ciudadanía que podíamos volver a gobernar y que ello no se fundamentaría en buenas intenciones, sino en la solidez de las instituciones nacionales y la salud de sus arcas públicas. Con una innegable lógica marxista hemos planteado que el Estado deber ser garante del bienestar, pero con un incontestable rigor y responsabilidad fiscal. Por eso, en el Chile actual, observamos con preocupación la contradicción de un gobierno que llegó prometiendo expandir los derechos sociales pero que ha terminado con un enorme déficit fiscal, lo que podría dar pie al nuevo gobierno y su moción de emergencia y "libertad" para el desmantelamiento de políticas públicas y la reducción del Estado.

La administración de Gabriel Boric enfrenta el cuestionamiento de los números de su gestión. La tesis de su programa de un Estado social y democrático de derechos choca con una gestión financiera con contradicciones, al no hacer los ajustes cuando se requerían. Cerrar su gestión con un déficit estructural cercano al 3,6% del PIB es mucho más que un error de cálculo, es al menos una irresponsabilidad política. Cuando un gobierno se ve obligado a recurrir a retiros financieros no programados, como la liquidación de activos estratégicos y el patrimonio de Corfo para cubrir gasto corriente, está admitiendo que ha perdido el control de las cuentas fiscales. Financiar gastos corrientes, por definición permanentes, con ahorros o con la venta de activos es una señal de decisiones erróneas sobre el manejo financiero. Y esa es la gran contradicción del gobierno Boric, ya que, en su afán por parecer garante de la dignidad, ha actuado como un liquidador de la solvencia futura del Estado y con ello de las políticas públicas.

La contradicción del gobierno de Boric es, sin quererlo (quizás), un espaldarazo a los conceptos de emergencia y libertad que promueve José Antonio Kast. Estos conceptos de Kast se presentan bajo la tesis de minimizar el Estado, reducir la carga tributaria y eliminar las políticas sociales vinculadas a los denominados "ismos" (identitarismos, ambientalismo y agendas de género). Esta propuesta que, en un país con finanzas sanas, podría parecer inapropiada, en el actual escenario fiscal, adquiere justificación y algo de sentido común para la ciudadanía (por algo ganó). El argumento de Kast es simple: el Estado no es capaz de gestionar recursos sin caer en déficit. Bajo esa lógica, el mal desempeño de Boric terminó validando la idea de que el Estado tiene mucha "grasa", de la cual la ciudadanía debe liberarse.

Sin embargo, el peligro de esta tesis es que, tanto "emergencia" como la libertad económica que ofrece la derecha conservadora, suele venir acompañada de autoritarismo. Ante los problemas sociales y el escaso crecimiento, el minimalismo estatal de Kast propone que el Estado se retire de la salud y la educación, pero que se fortalezca de manera desproporcionada en su seguridad o aparato represivo. En síntesis, propone un Estado que deje de ser garante de derechos para convertirse únicamente en guardián de la propiedad privada. Sin embargo, esta visión ignora que la verdadera libertad solo existe cuando la ciudadanía se siente protegida por una sociedad organizada que le asegure un piso mínimo de bienestar y dignidad.

La responsabilidad fiscal no es una bandera de la derecha, sino el requisito mínimo para cualquier proyecto de izquierda que se pretenda serio. Así lo hizo la Concertación en cada uno de sus Gobiernos. El uso del Fondo de Emergencia para parchar déficits presupuestarios es una señal contraria a la responsabilidad fiscal. Si el Estado no ahorra cuando el cobre o litio entrega excedentes, pierde la capacidad de proteger a los más vulnerables cuando llegue una crisis o emergencia. La gestión de Boric, al alejarse de la disciplina contable, ha dejado a la ciudadanía de cierta forma vulnerable.

La salida que Chile requiere con urgencia para sus finanzas no es el desmantelamiento del Estado ni su expansión irresponsable. Lo que se necesita es un Estado Garante con Responsabilidad Fiscal Permanente, sabiendo que cada año la sociedad moderna requiere más gasto. Esto implica entender que la justicia social es una política gradual y progresiva que requiere un crecimiento económico constante y una billetera pública transparente. No hay libertad cuando el Estado abandona al individuo a su suerte bajo el pretexto del minimalismo; tampoco en el inverso cuando el Estado debe vender su patrimonio. La libertad no es la ausencia de Estado, sino la presencia de un Estado solvente, técnico y justo. Si el próximo gobierno no logra esta síntesis, Chile quedará atrapado entre un progresismo que consume el futuro y un conservadurismo que renuncia a lo público, dejando a la sociedad civil indefensa. Bajar los impuestos o dejar de pagar contribuciones a la primera vivienda no son precisamente el camino apropiado.